

FJG

FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

DOS AÑOS DE GOBIERNO DE CHILE VAMOS GOBERNAR EN MEDIO DE LA ANOMIA

Nº 292 | 11 de marzo 2020



Ideas & Propuestas

RESUMEN EJECUTIVO

Habiéndose cumplido el segundo año de gobierno del presidente Piñera, su programa de gobierno se vio radicalmente interrumpido con la explosión de violencia de la insurrección que el país vive desde octubre. En el siguiente *Ideas & Propuestas*, analizamos el desempeño del Gobierno antes y durante el denominado “estallido social”.

I. INTRODUCCIÓN

El primer año de gobierno del presidente Piñera fue bueno, la economía crecía a casi el doble que el gobierno pasado, las formalidades que se requerían para ordenar la ola migratoria hacia nuestro país marchaba correctamente y con apoyo ciudadano, a la vez que el gobierno lograba un acuerdo transversal por la infancia. La oposición no lograba articularse, al punto que el entonces director de contenidos y de estrategia de la Presidencia señalaba que el gobierno prácticamente gobernaba solo.¹

Sin embargo, desde el 18 de octubre pasado, los días (salvo excepciones) han sido muy difíciles para el Ejecutivo. Hace exactamente un año, el presidente Piñera tenía una aprobación del 37 %, según consigna la encuesta Cadem,² y para esos días se consideraba una cifra bastante baja, atribuida a la polémica de los medidores de luz inteligentes. Paralelamente, en el mismo estudio se vio una aprobación del Ejército de 42 % y de la Iglesia de un 13 %, además de una

gran adhesión a las demandas feministas, pues un 73 % de la muestra consideraba que Chile es un país machista.

Para este segundo año, las intenciones iniciales del Gobierno eran buscar consolidar sus grandes reformas en temas como la modernización tributaria, reformas al sistema previsional, al área de salud y de trabajo. Sin embargo, nadie pudo prever ni adelantar la explosión de violencia, de caos y desencantamiento que sufriría la política formal durante este año. No es temerario afirmar que un equivocado rol de la tecnocracia y un déficit en la construcción de símbolos que acompañen a las diferentes tareas, proyectos y anuncios, contribuyeron a encender la mecha del 18-0.

En este número de *Ideas & Propuestas*, ofrecemos una reflexión crítica de la gestión del Gobierno, entendiendo que la política institucional sufre una grave deslegitimación.

¹ <https://bit.ly/2TVqsgn>

² Cadem (2019) Estudio N°269 - 11 de marzo. Recuperado de: <https://bit.ly/337vevc>

II. OCTUBRE COMO PUNTO DE QUIEBRE

A inicios de octubre de 2019, las reformas estructurales propuestas por el Gobierno aún no eran aprobadas –por la constante obstrucción parlamentaria de la oposición–, y el empleo era un tema preocupante, al igual que la economía. La violencia durante el año pasado fue escalando progresivamente, los portonazos y la delincuencia empezaron a ser parte de la cotidianeidad, pero también la violencia que se vivía dentro de liceos emblemáticos –solo en el Instituto Nacional se vieron incendios, bombas molotov, más la presencia de los overoles blancos–³ y en universidades –recordado es el caso de la estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile hostigada y maltratada por su abierta posición política de derecha–. También se considera que, para las actividades en el contexto de las celebraciones de las Fiestas Patrias las semanas anteriores al 18 de septiembre, hubo numerosos ataques incendiarios a medialunas de rodeos como en Paredones, Coquimbo, Curacaví, La Ligua, entre otros, en los que dejaban panfletos contra la tradición chilena y el rodeo, firmado por grupos animalistas.

Según la encuesta Cadem presentada la tercera semana de octubre de 2019, el presidente Piñera tenía una aprobación del 29 %, ⁴ la que disminuiría

drásticamente con el desarrollo de la insurgencia, alcanzando un mínimo histórico desde 1990 con una aprobación del 6 % en el mes de enero, según la encuesta CEP.⁵ Muchas de las críticas provenientes del amplio espectro político coinciden que el Gobierno, incluyendo la gestión del presidente, no ha dado abasto al no terminar de comprender las nuevas formas de expresión de la conflictividad política que se han gestado en las calles chilenas, impulsadas por los diferentes movimientos sociales y, en específico, por los movimientos estudiantiles.

Tal como se ha tratado en *Ideas & Propuestas* anteriores,⁶ el malestar social fue *in crescendo* previo al 18 de octubre. El 2019 comenzó con la polémica de los medidores de luz –se renovarían su tecnología, pero el costo lo asumirían los hogares–, y finalizó con el mal llamado “Estallido Social”, cuyo dispositivo principal fue el mal manejo político del aumento de \$30 a la tarifa del transporte público.⁷ Además, el Gobierno, desde agosto, había extraviado la potestad de llevar su agenda propia, pues la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, de las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejos, fue el proyecto legislativo protagonista hasta el 18 de octubre.

³ Véase <https://bit.ly/2VZys2x>

⁴ <https://bit.ly/2Q83npo>

⁵ Encuesta CEP del 06 de enero de 2020. Ver más en: <https://bit.ly/339pwcg>

⁶ Para una mejor comprensión de la insurrección chilena, revise el *Ideas y Propuestas* N° 282, titulado “Crónica de una crisis social no anunciada”, en: <https://bit.ly/2TTNZhy>

⁷ Véase <https://bit.ly/33aNHqT>

III. EL GOBIERNO TRAS EL “ESTALLIDO” DE INSURRECCIÓN EN CHILE

El 18 de octubre detonó un estallido de violencia, caos, y movilizaciones. La normalidad se vio violentamente interrumpida y el Estado de Derecho amenazado. Además, el alza de \$30 del pasaje del transporte público mostró un malestar en la población, pues el aumento de expectativas presentadas en la campaña electoral del presidente Piñera no se concretaban (el país no lograba remontar el crecimiento, la seguridad preocupaba a la ciudadanía, no avanzaba el llamado acuerdo en la Araucanía, etc).

De otro lado, los chilenos -adhirieran o no a las masivas movilizaciones que hubo en un inicio- quedaron atónitos al ver que veinte estaciones de metro de la ciudad de Santiago se quemaban simultáneamente, al igual que el edificio corporativo de Enel. Se vio una lenta y torpe respuesta por parte del mundo político, quienes suspendieron el alza del pasaje tras 3 días de discusión parlamentaria, cuando la violencia se había desatado a niveles en que tuvo que decretarse toque de queda, debido a los saqueos e incendios a indumentaria pública, además de la lamentable muerte de civiles.

La agenda propia del Ejecutivo tuvo una drástica transformación. Fue así que, el 22 de octubre, anunció su “Nueva Agenda Social”, con un enfoque social y urgente por mejorar aquellas demandas

ciudadanas, como las pensiones, un ingreso mínimo garantizado, y tarifas estables eléctricas y otros servicios como el agua y los peajes. También, se anunció la creación de un seguro que cubre parte del gasto de medicamentos no cubiertos por otros mecanismos, así como la ampliación del convenio de Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos. Se anunció además la creación de un seguro de enfermedades catastróficas.

A pesar de la nueva agenda, la gestión presidencial se vio altamente criticada a nivel nacional como internacional, empujando un cambio de gabinete el 28 de octubre. A estas alturas, ya la calle había sido tomada por grupos principal -y explícitamente- opositores. De modo que, si bien la ceremonia de cambio de gabinete mostró una pésima puesta en escena, evidenciando las carencias en comprensión de la importancia de las representaciones simbólicas, las manifestaciones violentas no cesaron, y menos aún las críticas al gabinete recién asumido. Vimos así un aumento de la conflictividad al exigir la destitución de gran parte del gabinete -en especial en las carteras de Educación, Salud y Transporte-, manifestándose un enojo ciudadano por los enroques ministeriales -apuntando a Cecilia Pérez y su permanencia en el gabinete- y la continuidad del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla -quien, finalmente, renunció el 19 de diciembre.

A fines de octubre, el quiebre de la normalidad del país producto del caos y violencia ya había logrado cambiar completamente la agenda y clivajes políticos. Lo ocurrido el viernes 18 de ese mes no era una masiva protesta, al contrario, se entendió como la señal explícita de una crisis sociopolítica grave, la más profunda desde el retorno a la democracia, cuya forma de expresión no tenía antecedentes. Esta realidad llevó a que se suspendieran actividades de gran relevancia internacional y que Chile tenía el honor de presidir, como APEC y la COP25, aun cuando días previo al “Estallido” de Insurrección, el cambio climático era el tema más debatido en el país.

El llamado del presidente Sebastián Piñera (12/11) a los partidos políticos a sumarse a tres importantes pactos para poder responder a la contingencia nacional⁸, concretado el 15 de noviembre por la madrugada, es un hito no solo de esta crisis, sino además de su gobierno, y de los últimos 30 años. Sin embargo, puede ser analizado desde más de una dimensión. La primera es que el acuerdo demostró que la política fue capaz de hacer política,

es decir, los partidos dieron una señal de manejo con apertura a las posiciones contrarias, con el fin de dar una salida a la crisis (aun cuando hubiesen diferencias sobre si el instrumento utilizado –la Constitución– era el símbolo correcto o la salida que el país requería). Sin embargo, también tiene una dimensión no tan positiva, en tanto el acuerdo logrado implicó un paso a segundo plano del Gobierno y le quitó todo protagonismo al presidente (aun cuando fue él quien lo impulsara y tuviese el poder de hacerlo). Del mismo modo, con el paso de los meses, ha quedado en evidencia que parte importante de los firmantes han sido débiles en la condena a la violencia –que por lo demás se recrudeció, faltando así a parte medular del compromiso adquirido. La agenda, así, se ha hecho casi incontrolable para el Gobierno, no solo por los temas que abarca el proceso en curso, sino además por la mezquindad de gran parte de la oposición. Las discusiones que se han escuchado en torno al plebiscito se han centrado en cómo se compondrán los constituyentes, la paridad de género y cuotas a grupos de interés.⁹

⁸ Un *Pacto por la Paz*, que busca una condena transversal respecto de la violencia y el apoyo a detener la destrucción; el *Pacto por la Justicia Social*, que apunta a comprometer el voto a las medidas de corte social y, finalmente, el *Pacto por una Nueva Constitución*, que busca reemplazar a la Carta Magna ahora vigente.

⁹ Véase <https://bit.ly/38MTiFb>



Foto: bbc.com

El ánimo de interrumpir la normalidad en la ciudadanía también se trasladó a la institucionalidad. Numerosas acusaciones constitucionales e interpelaciones a ministros han ocurrido, incluyendo una acusación al propio presidente Piñera, que no llegó a puerto debido al respaldo por parte de diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Radical.

Por otro lado, el boicot a la PSU -que fue reagendada en otras dos ocasiones para terminar el proceso de admisión 2020- mostró que la violencia no cesará

durante el verano, pues incluso estudiantes de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) amenazaron con un marzo con movilizaciones estudiantiles. Esto ha sido observado por diferentes líderes de opinión como la antesala del plebiscito de entrada agendada a finales de abril. Puesto que, si una prueba de admisión universitaria se interrumpe y suspende a nivel nacional gracias a la acción de insurrectos que buscan imponer el caos, nada augura que el proceso constituyente pueda desarrollarse en tranquilidad.



Foto: t13.cl

IV. REFLEXIONES Y DESAFÍOS

El presidente Piñera resultó electo por representar a un imaginario político de prosperidad económica, principalmente la promesa de oportunidades laborales y crecimiento. Lamentablemente, toda la tecnocracia con la que se contaba no fue capaz de sacar adelante el programa de gobierno, pero además, carente de oficio político, desconoció la importancia de los símbolos, el lenguaje y tiempos que la política requiere. Así, generó que no solo los adversarios políticos lo reprobaran, sino también gran parte del propio electorado que le dio la victoria en las elecciones presidenciales de 2017.

La decisión de neutralidad ante el proceso constituyente en curso ha puesto al Gobierno en una situación difícil, obligando a que el presidente tome presencia en otras materias de menor rigor, pues en la agenda social que trata de impulsar tampoco tiene mucho margen de acción, considerando que requiere de un congreso –hasta ahora esquivo– para aprobar sus proyectos.

Los desafíos del gobierno del presidente Piñera son complicados. A pesar de tener una baja aprobación ciudadana, y con un año de movilizaciones, huelgas y paros más que pronosticados –desde establecimientos educacionales a otros sectores como trabajadores portuarios o camioneros–, el presidente debe asegurar la institucionalidad, lo que significa ser sumamente cuidadoso en el actuar político propio, pero también de su grupo ministerial.

Aun cuando esta crisis no es del todo responsabilidad de este Gobierno, de todos modos enfrenta hoy el riesgo de debilitar más la institucionalidad, en tanto que las medidas para resguardar el orden tardan.

El relato de unidad debe primar, pero sin caer en la trampa de adherir a todo reclamo de la oposición y de los adversarios, sino con la intención de dar soluciones reales a los problemas de la ciudadanía.



Capullo 2240, Providencia.

www.fjguzman.cl

 /FundacionJaimeGuzmanE

 @FundJaimeGuzman

 @fundacionjaimeguzman